



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte nº: 3212/2024 AML

Autos: “SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO SA c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva del Expte. Nº 3212/2024

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

I.- Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Resolución N ° 2022-24848-APN-DRLF#MT, dictada por la Dirección Nacional de Fiscalización del MTESS, por la que se desestima el recurso de impugnación administrativa interpuesto contra el acto administrativo dictado en el expediente N ° 799-1090454-2019.

Oportunamente se le hizo saber a la rubrada, que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 10 inc. b) de la Resolución METySS N ° 655/05 y sus modif.).

En las actuaciones, obra boleta de depósito que acredita el pago de la multa a los fines de la apertura de la instancia judicial, elevándose las actuaciones a esta Excma Cámara Federal de la Seguridad Social, para su intervención.

II.- La apelante se agravia de lo decidido, expresando que no ha sido empleadora de la Sra. DIAZ NATALIA LILIANA, cuestión que considera probada en autos y que el empleador quien dio correctamente de alta a la trabajadora ha sido la empresa TRELAND SA, hecho que afirma ha sido reconocido en la resolución e injustificadamente desestimado. Que, en lo sustancial, la sumariada sostiene que la persona relevada y mencionada precedentemente no es empleada dependiente de SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO SA sino que trabaja para TRELAND S.A. y que tampoco se trata de un caso de pluriempleo

III.- Conforme se desprende de autos, la causa se inicia como consecuencia de un relevamiento de personal llevado a cabo por inspectores del MTESS, en el cual se detecta el incumplimiento a la debida registración del alta (Solicitud de Clave de Alta Temprana), respecto de la trabajadora que se encuentra enumerada en el Acta de Comprobación (DIAZ NATALIA LILIANA).

En primer término cabe poner de resalto que la Resolución N ° 899 (AFIP) y su modificatoria N ° 943 (AFIP) a fin de implementar el sistema de “Clave de Alta Temprana” estableció para los empleadores, la obligación de registrar a sus nuevos



trabajadores dependientes con anterioridad al efectivo inicio de la relación laboral.

La Resolución 1891 (AFIP) fue dictada a los efectos de “perfeccionar el sistema y a optimizar las acciones que debe cumplir el empleador, dentro de un marco de mayor seguridad”. Así, se implementó y aprobó el sistema informático que opera a través de la red de “internet” para que los empleadores puedan registrar las altas y bajas de sus trabajadores.

El art. 3 de la citada resolución, establece que la comunicación del alta en el Registro” deberá efectuarse dentro de los plazos que se indican, para el caso, el contenido en el inciso b) que establece “hasta el día inmediato anterior, inclusive, al de comienzo efectivo de tareas, cualquiera fuera la modalidad de contratación celebrada”.

A mayor abundamiento, el art. 22 de la mencionada resolución dispone que la fecha de inicio o cese de la relación laboral sólo será oponible, salvo prueba en contrario, ante la Administración Federal, en la medida en que se haya comunicado, respectivamente, el alta o baja en el “Registro”. A lo que agrega para el caso de alta en el “Registro” también será requisito que el trabajador se encuentre denunciado en la declaración jurada determinativa y nominativa de las obligaciones con la seguridad social, correspondiente al mes de inicio de la relación laboral, de acuerdo a lo alegado por el empleador.

Y el art. 23 determina que los empleadores que incumplan –total o parcialmente– las obligaciones dispuestas por esta resolución general serán pasibles de las sanciones establecidas por la Resolución General N° 1566, texto sustituido en 2004.

Señalada la normativa aplicable al caso, se vislumbra que el acta fue confeccionada con fecha 13 de junio de 2019 y la clave de alta temprana obrante a fs 83 del administrativo agregado vía DEO a las presentes, la fecha data del 9 de mayo de 2019, habiendo sido declarada la empleada, por la empresa Treland S.A.

Ello así, el organismo ministerial no ha merituado debidamente lo expresado por la parte actora, en cuanto a qué empresa pertenece tal empleada, por que se encontraba desempeñando tareas en otro lugar y si verdaderamente se encontraba registrada y desarrollando tareas para Treland S.A. En la resolución que se recurre, soslaya toda fundamentación que haga referencia a lo antedicho, resultando fundamental para la resolución del presente. La garantía del debido proceso legal lleva aparejado diversos elementos integratorios para el administrado; el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a que se dicte una decisión fundada que contemple sus alegaciones y resuelva sus pretensiones.

A mayor abundamiento, corresponde señalar que si en el proceso administrativo se procura la preparación y el dictado de actos administrativos con los cuales se satisface en forma directa e inmediata las necesidades colectivas y los fines del Estado y en definitiva de la comunidad toda, no es menos cierto que estos actos están dirigidos por la exigencia de su legitimidad, o sea de su subordinación completa al orden jurídico





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1
del cual resulta todo lo atinente a la oportunidad, mérito y conveniencia (en este sentido, Escola Héctor J: Tratado General de Procedimiento Administrativo, Ed. 1975).

En los procedimientos de impugnación es el administrado quien pretende la actuación de la ley, en sentido lato, entendiendo que su pretensión procede más que la articulada por la Administración, sin perjuicio de que ésta ratifique su accionar.

García Oviedo señala que “las exigencias propias de un estado de derecho imponen a la administración un régimen jurídico que ordene su vida y al propio tiempo, garantice a los particulares sus situaciones jurídicas frente al obrar de aquella” (García Oviedo, Derecho Administrativo, Madrid, 1959, T. 1, PÁG. 619).

Por ello, en el procedimiento administrativo impera el principio de verdad material o real. La administración debe llevar a cabo las medidas de prueba que sean conducentes para determinar la realidad efectiva de los hechos.

Por lo expuesto, no resultando de las constancias de autos que se hayan arbitrado medidas suficientes para indagar la verdad objetiva de los hechos, ni aplicado criterios de razonabilidad, a fin de que el pronunciamiento produzca efectos jurídicos válidos (cfr. art. 1 inscs. a, b c y f de la ley 19.549 y esta Sala en autos “Industrias Metalúrgicas Dino Bartoli c/ Administración Federal de Ingresos Públicos –DGI- s/ Impugnación de Deuda”, sentencia definitiva N° 119.396 del 29/06/06, entre otros), corresponde declarar formalmente admisible el recurso y dejar sin efecto la resolución recurrida ordenando al organismo reintegre la suma depositada por la apelante para acceder a la instancia judicial con más sus intereses a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco central de la República Argentina, desde la fecha en que se hizo efectivo el depósito y hasta su devolución al depositante (conf. Art. 10 dto. 941/91; CSJN L. 44.XXIV “López, Antonio Manuel c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A”, sentencia del 10/06/92 y Fallos 303:1769, 311/1644, entre otros).

IV- En atención a que el organismo ministerial, no es equiparable con las partes en las contiendas judiciales comunes, sino que actúa oportunamente en defensa del interés general, las costas se imponen en el orden causado (cfr. art. 68 del CPCCN).

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE: 1)- Declarar formalmente admisible el recurso interpuesto; 2)- Dejar sin efecto la resolución recurrida de acuerdo a las consideraciones expuestas precedentemente; 3)- Ordenar al organismo reintegre la suma depositada por la apelante para acceder a la instancia judicial, con más sus intereses a la tasa promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha en que se hizo efectivo el depósito y hasta su devolución al depositante (conf. Art. 10, dto. 941/91; C.S.J.N. L. 44. XXIV “López, Antonio Manuel c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A., sentencia del 10/06/92 y Fallos 303:1769; 311:1644, entre otros); 4) Costas por su orden.

Regístrese, notifíquese y devuélvanse.



